

Venezuela, Colombia y los Carteles

www.360geopolitica.org

Resumen Ejecutivo

El eje Maduro-Petro se erige hoy como una de las amenazas más coordinadas y audaces para la estabilidad regional en las Américas. Sus redes políticas y criminales se han fusionado a través de Venezuela y Colombia, consolidando poder mediante la intimidación, los flujos financieros ilícitos y alianzas con grupos armados transnacionales como el ELN y las disidencias de las FARC, dinámicas que han alimentado la violencia, el desplazamiento y el narcotráfico en ambos países.

Una victoria de Trump en 2024-2025 representó una amenaza existencial para estos regímenes, lo que provocó provocaciones agresivas y esfuerzos abiertos para influir en las elecciones de Estados Unidos. Estas confrontaciones públicas ocultan una realidad más profunda: una infraestructura robusta de crimen y coerción que incluye el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua en Venezuela, sindicatos criminales vinculados a la producción y tráfico de cocaína, y redes que operan con impunidad a través de las fronteras.

La sociedad civil y los movimientos de base en ambos países han demostrado reiteradamente su rechazo a estos narco-regímenes, incluso mientras actores internacionales –incluidos España, China, Rusia, Irán y ONG alineadas– amplifican la narrativa de Maduro y Petro, normalizando la gobernanza criminal y marginando la disidencia.

Sin un liderazgo internacional decisivo la consolidación del crimen organizado dentro de las estructuras del Estado continuará sin control, amenazando las instituciones democráticas, la seguridad regional y los derechos humanos en todo el hemisferio.

Desde el lanzamiento de la campaña presidencial de Estados Unidos 2025-2029, Maduro y Petro han librado una ofensiva política coordinada y hostil contra Donald Trump, instando a los votantes a apoyar a su oponente.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue más allá al llamar abiertamente a los estadounidenses a votar contra Trump durante su

visita a Estados Unidos en octubre de 2024, una intervención sin precedentes en la política interna estadounidense.

Para marzo de 2025, estas provocaciones escalaron a ataques personales contra Trump, reflejando un entendimiento calculado de que una victoria de Trump podría traer acciones decisivas contra las redes de crimen organizado transnacional, la misma infraestructura que sostiene su supervivencia política.

Durante este período, Petro intentó fabricar relevancia internacional alegando acceso privilegiado al presidente Joe Biden, incluso afirmando que se le había compartido información de seguridad sensible, afirmaciones ampliamente consideradas inverosímiles y oportunistas.

A medida que se avecinaban imputaciones penales, Maduro-Petro intensificaron sus provocaciones. En agosto de 2025, Maduro desafió públicamente a Trump a actuar, declarando: “Vengan por mí. Aquí los estaré esperando, no lleguen tarde”, con Petro haciendo eco de este desafío en abierta solidaridad.

Provocaciones similares siguieron en septiembre de 2025 y enero de 2026. En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2025, Petro cruzó una línea histórica al instar públicamente a personal militar estadounidense a desobedecer a su comandante en jefe, un acto deliberado que, según fuentes cercanas al círculo íntimo Maduro-Petro, buscaba presentarlos como víctimas del llamado “imperialismo estadounidense” en caso de ser arrestados.

Detrás de esta retórica agresiva se encuentra un aparato criminal profundamente organizado y bien financiado. En Venezuela, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua operan junto a aliados colombianos como la Segunda Marquetalia, el ELN y facciones disidentes de las FARC, además de mantener vínculos con carteles mexicanos y grupos terroristas internacionales, incluidos Hezbolá y Hamas¹.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=xqsTDv3NL7w>

En Colombia, el marco de la “Paz Total”, implementado durante la campaña presidencial de Petro en 2022, otorgó al crimen organizado y los grupos armados ilegales *operaciones criminales ininterrumpidas, control territorial e inmunidad de facto*. Estas concesiones no solo han fortalecido la gobernanza criminal, sino que también han provisto a los regímenes de millones de dólares, creando una base ilícita y duradera para el poder político.

Los venezolanos han soportado miedo y coerción durante casi dos décadas, y los colombianos ahora enfrentan realidades similares bajo la administración Petro, el senador Iván Cepeda y el Pacto Histórico. Los grupos armados ilegales y el crimen organizado ya no son adversarios del Estado, sino socios instrumentalizados que controlan territorio, influyen en universidades públicas y funcionan como un brazo armado de facto de la coalición gobernante.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026, el régimen Maduro-Petro envió al Senador Iván Cepeda a España para condenar la acción, señalando la continua alineación política del liderazgo colombiano con un dictador venezolano que ha perdido múltiples elecciones y solo se mantiene en el poder mediante la fuerza.

España ha respaldado reiteradamente a Maduro-Petro, a menudo con escasa transparencia, alineándose de facto con regímenes y actores como Bielorrusia, Cuba, China, Nicaragua, Irán, Rusia y entidades no estatales como Hezbolá y Hamas². Este respaldo internacional ha amplificado la narrativa de los regímenes, presentándolos como líderes legítimos mientras se margina la disidencia.

Tras la captura de Maduro, no se produjeron manifestaciones espontáneas en su apoyo, salvo una protesta limitada y patrocinada por el Estado en Colombia que dependió de incentivos financieros y coerción a funcionarios públicos. En contraste, estallaron manifestaciones masivas y espontáneas en las Américas y más allá, y en Colombia en particular entre los refugiados venezolanos, señalando un rechazo genuino a la

narco-gobernanza. Las redes criminales se han expandido drásticamente bajo Maduro y alcanzaron su punto máximo bajo la iniciativa de “Paz Total” de Petro.

Colombia ha recuperado su posición como el mayor productor y exportador mundial de cocaína, acompañado de aumentos en secuestros, trata de personas y armas, extorsión, terrorismo urbano y explotación ilegal de recursos naturales (como en Venezuela).

La administración Petro ha solicitado formalmente al Secretario General de las Naciones Unidas que revise la metodología para monitorear los cultivos de coca, buscando efectivamente silenciar la discusión del problema y debilitar el escrutinio internacional, fortaleciendo aún más a las redes criminales.

Durante casi 20 años, la comunidad internacional le ha fallado a Venezuela, normalizando negociaciones con Maduro mientras esperaba que renunciara al poder. Ese mismo patrón ahora amenaza a Colombia.

Fondos internacionales han respaldado una narrativa revisionista que presenta a actores criminales como héroes a través de medios estatales, películas y publicaciones. Las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan esta narrativa son excluidas sistemáticamente de consultas, mecanismos de financiamiento y plataformas internacionales, dejando como únicos interlocutores reconocidos a los grupos alineados con Petro y Maduro.

Venezolanos y colombianos han recurrido cada vez más a Estados Unidos como el único actor capaz de abordar esta crisis multifacética, subrayando la necesidad urgente de un liderazgo decisivo y coordinado para contrarrestar estos narco-regímenes y restaurar la rendición de cuentas en la región.

Tanto en Venezuela como en Colombia, quienes alzan la voz o expresan abiertamente su fe en las instituciones democráticas enfrentan persecución y represión directas. Los venezolanos y colombianos que abogan por reformas son perseguidos por los respectivos regímenes,

² <https://www.youtube.com/watch?v=xq5TDv3NL7w>

mientras que líderes de la oposición en Colombia han sido imputados bajo la administración del presidente Petro, revelando un esfuerzo coordinado para silenciar la disidencia y consolidar el poder político criminal.

Petro, al igual que Maduro, se proyecta internacionalmente como un líder respetado y legítimo, mientras ignora una realidad contundente: su poder político depende menos de la legitimidad democrática que de la acomodación con actores criminales y grupos armados ilegales incrustados en toda Colombia.

Su iniciativa emblemática de “Paz Total”, lanzada como un esfuerzo audaz para poner fin a décadas de conflicto, ha fracasado repetidamente, con negociaciones clave -incluidas las con el ELN- suspendidas en medio de la violencia continua y el colapso de los ceses al fuego, mientras los grupos armados explotan las brechas en la aplicación de la ley y el control estatal.

El régimen de Maduro se aferra al poder mediante la represión y redes ilícitas, mientras Petro y su coalición, hoy representada por Iván Cepeda, utilizan las mismas estructuras para mantenerse en el poder por cualquier medio³.

Bogotá, Colombia, 13 de enero de 2026.

³ <https://www.youtube.com/watch?v=xq5TDv3NL7w>